CERTEZA JURÍDICA DE LA PENA EN LOS JUZGADOS DE PAZ PENAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Waldo Josué Alvizurez Ruano

Breve descripción del problema:

La Constitución Política de la República de Guatemala establece el principio de Exclusividad Judicial regulado en el artículo 203, el cual consiste en que corresponde a los tribunales de justicia con exclusividad la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, también los es que dentro del ámbito penal de conformidad con la Ley Adjetiva en su artículo 7 se establece " El Juzgamiento y decisión de las causas penales se llevará a cabo por jueces imparciales e independientes, sólo sometidos a la Constitución y a la Ley. La ejecución penal estará a cargo de los jueces de ejecución." Es decir, que existe un órgano especializado para ejecutar lo juzgado, y con plena competencia para ello. El inciso 8) del artículo 43 del Código Procesal Penal, y más específico el artículo 51 del mismo cuerpo legal, regula: "Jueces de ejecución. Los jueces de ejecución tendrán a su cargo la ejecución de las penas y todo lo que a ellas se relacione, conforme lo establece este Código. Entendiéndose que las penas "ejecutables" dentro de nuestro ordenamiento consisten en las señaladas en el Título VI del Código Penal que enumera las penas principales, siendo éstas; la de muerte, la de prisión, el arresto y la multa; así como las accesorias. Teniendo claro que dentro de la competencia del Juez de Paz, él puede conocer de asuntos sancionados con arresto y multa, siendo éstos faltas o delitos.

Teniendo esta primera introducción al problema podemos detectar que el Juez de Paz dentro de su competencia debe realizar todas aquellas actividades que dentro de su competencia se deriven para

proveer de certeza jurídica al proceso penal y a la pena impuesta; para que esta cumpla sus principales finalidades tales como la sancionadora y preventiva, y esto ocurre por la falta de cumplimiento de las reglas de ejecución de las penas y se incurre en falta de certeza jurídica de la pena, ya que el Juez de Paz con su desconocimiento crea la inoperancia de la

El principio de Exclusividad Judicial establece que corresponde únicamente a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado.

Reincidencia y Habitualidad y en consecuencia aplica una pena no acorde hacia el sindicado ya que si una persona al cometer falta o delito es reincidente o habitual; la pena de este de de ser graduada de conformidad con la aplicación de las agravantes de reincidencia y habitualidad; el panorama se complica aún mas en aquellos casos que el propio tipo penal duplica la pena por una

segunda comisión del ilícito penal, tal es el caso del delito de responsabilidad de Conductores y el delito de Potación de Arma en Estado de Embriaguez, uso de Estupefacientes y/o Barbitúricos y esto insisto se debe por la falta de conocimiento del juez de Paz de las reglas y/o obligaciones de la Ejecución de la pena; lo cual se puede explicar de la siguiente manera: incluso existen delitos dentro de la competencia, de lo anterior se desprende que el Juez de Paz Penal carece de competencia para la prosecución de la fase de ejecución dentro del procedimiento en que él ejerce jurisdicción; el juzgador al realizar la fase de ejecución dentro de las sentencia en la que se impone una pena de arresto o multa lo realiza no estando para ello facultado, ya que recordemos que él como funcionario estatal, puede realizar únicamente lo que la ley le permite. Es decir el Juez de Paz Penal sólo puede conocer de aquellos casos que la propia legislación le faculta.

En consecuencia del análisis anterior se concluye que en este momento, y desde el punto de vista legal, el juez de paz penal carece de competencia legal para ejecutar lo juzgado. Y al no tener claro que es este el que debe ejecutar la pena impuesta (arresto o multa) se obvian los principios que rigen la ejecución de la pena.

Siendo indispensable la solución de la problemática expuesta, y para ello se contempla en primer lugar que el Juez de Paz Penal tenga competencia para la ejecución de lo juzgado, lo cual se podría lograr con una reforma a la Ley Procesal, por lo que, resulta la presente investigación acertada, toda vez que la Cámara Penal se encuentra en la promoción constante de reformas a la legislación penal, para ampliar la competencia de los Jueces de Paz, siendo oportuno la inclusión del cambio en dicha reforma, para así el Juez de Paz puede ejecutar lo juzgado dentro de su ámbito legal.

En segundo lugar al este tener la competencia para realizar la fase de ejecución el Juez de Paz, tenga la obligación que conlleva una adecuada continuación de proceso la cual es de suma importancia para la política criminal que ejerce el Juez de Paz como primer contacto o principal entrada que hacen los individuos a la administración de justicia.

Derivados de la facultad de ejecutar lo juzgado, se deriva una serie de aspectos importantes que se deben de tener presentes para la doble funcionalidad de la pena, siendo esta sancionadora y preventiva, lo cual sin una correcta y efectiva ejecución de nada sirve el llevar adelante una serie de etapas del procedimiento penal si al final quien resulta siendo responsable de un delito o falta, que es la que mas no interesa, vea la facultad punitiva del estado inconclusa toda vez que jamás fue aplicada la medida sancionadora señalada por el reproche social a él efectuado.

Dichos aspectos serán debidamente desarrollados dentro del informe final de la investigación jurisdiccional.

Como primer aspecto dentro de la fase de ejecución que el Juez de Paz Penal al estar facultado para la ejecución de lo juzgado por él debe de tomar en cuenta es el principio de Ejecutoriedad; es decir que la condenas no serán ejecutada antes de que se encuentren firmes y derivado de ello que una vez firme la pena impuesta ésta se cumpla con observancia legal.

Posteriormente el juez de paz debe realizar tal y como obliga la ley dentro de la fase de ejecución, las comunicaciones, inscripciones, decomiso, destrucción de cosas y documentos que correspondan. Dentro de los controles que debe realizar, es procedente anotar que una persona fue condenada por una falta, es preciso señalar que dicho registro no existe en la actualidad, pero a mi criterio sí debe existir, toda vez que la ley sustantiva penal regula como agravantes la reincidencia y la habitualidad, y que operan en las faltas, creándose así una base estadística de las personas que cometen faltas, ya que el Juez al aplicar una pena (multa o arresto) debe observar las reglas establecidas en el artículo 65 del Código Penal, para aplicar la pena que corresponda adecuadamente dentro de cada caso. Al constituirse en Juez de Paz como el primer acceso a la administración de la Justicia, éste debe contar con la información necesaria lo cual es el registro de faltas, ya que los individuos evalúan que su costo de oportunidad es mínimo, y que no son sancionados adecuadamente, debiendo el Juez ejercer como parte del Estado, la Política Criminal, de la cual es inexistente en la actualidad, ya que si una persona inicia con una falta, y comete otra debe ser sancionado más drásticamente. Se conocen casos en donde el mismo individuo ha llegado una y otra vez sindicado de una misma falta, y tomando en cuenta lo anterior sería interesante establecer cuántos delincuentes que en la actualidad cometen delitos de impacto social, iniciaron falteando, y al establecer que no son castigados, su costo de oportunidad es mínimo y continúan elevando su nivel de delincuencia, es decir por ejemplo, pudieron haber iniciado con faltas contra las persona, contra las buenas costumbres, a robar gallinas, a robar a transeúntes, a robar en transporte, a matar para robar etc. Dejando por un lado la doble función de la pena que es preventiva y sancionadora, ya que el condenado recibe siempre una pena leve por carecer de información veraz para aplicar la reincidencia y la habitualidad y aplicar una sanción mas grave y la función preventiva que los demás miembros de la sociedad observan que el delincuente, fácil resuelve su situación jurídica ante los tribunales de justicia. Y para finalizar este aspecto de la comunicación de la determinación de que se cometió una ilícito penal leve (falta) hay un problema más grave y es que dentro de la competencia de los Jueces de Paz, éstos conocen de delitos que son sancionados con pena de multa, de los cuales tampoco son enviados a la Unidad de Estadística Judicial para la anotación del registro correspondiente.

Otro aspecto importante es el control proveído por el juez de ejecución sobre la observancia de las imposiciones e instrucciones señaladas al otorgamiento de un criterio de oportunidad por parte del Juez de paz. (Ver art. 25 288 CPP.) Que en la actualidad el Juez de Paz otorga dicha medida desjudicializadora y no es supervisada por él, siendo el competente el Juez de ejecución, y en adolescentes; el Juez de Control de Ejecución de Adolescentes.

Análisis del problema

La pena

“La pena consiste en la privación o restricción de bienes jurídicos, impuesta conforme a la ley por los órganos jurisdiccionales competentes, al culpable de una infracción penal.”¹

La pena es la primera y principal consecuencia jurídica del delito, es decir de una acción típica, antijurídica, culpable y punible.

Para el autor Santiago Mir Puig, la pena “es la consecuencia jurídica del delito, que consiste en la privación o restricción de bienes jurídicos que impone el órgano jurisdiccional basado en la culpabilidad del agente y que tiene por objeto la resocialización del mismo”.²

Muñoz Conde define la pena “como un mal que impone el legislador por la comisión de un delito”.³

Como se puede destacar de las definiciones anteriormente transcritas, existen elementos o características esenciales propias a este instituto penal que lo configuran y distinguen del resto de las posibles sanciones jurídicas que existen, tales como los apremios administrativos o las multas administrativas o de cualquier otra naturaleza y que son los siguientes:

La pena solo puede ser creada por el organismo legislativo expresamente facultado para ello. Lo cual deriva directamente del principio de legalidad. Esta es una característica básica pues los jueces no pueden cambiar la punibilidad de un tipo penal, ni en la clase de pena ni en sus límites inferior o superior.

No puede existir pena sin delito ni puede aplicarse otra sanción que no este previamente establecida. Nullum poena sine lege.

La fijación, es decir la determinación de la pena es una actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales. Lo que la diferencia de otro tipo de sanciones como la administrativa que puede ser impuesta por un determinado funcionario, o las disciplinarias impuestas por los órganos patronales. Y como un ingrediente especial constitucionalmente regulado, de máximo interés para este trabajo, el hecho mismo de que compete al Organismo Judicial, como monopolio constitucional, juzgar y promover la ejecución de lo juzgado como lo establece el Artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

La pena es la primera y principal consecuencia jurídica del delito, es decir de una acción típica, antijurídica, culpable y punible.

La naturaleza pública de la pena por la cual se le restringen o limitan al procesado determinados bienes jurídicos, tal el caso de la vida en la pena de muerte, el patrimonio en las penas pecuniarias, la libertad con la pena de prisión, etc.

Y, una última característica es que la pena sólo se podrá imponer a una persona declarada culpable de un hecho delictivo, Nullum poena sine iucio, que tiene su respaldo legal en el principio de juicio previo.

En mi opinión, en cuanto a la última definición, si bien es cierto la pena la impone el legislador al momento de crear la norma, es el tribunal quien la impone en caso concreto al momento de dictar la sentencia respectiva, dentro de los límites que la misma norma establece.

Clasificación

Atendiendo a su duración, pueden distinguirse en perpetuas y temporales; por su gravedad, en graves y leves, con o sin la modalidad intermedia de menos graves; por su finalidad se ha distinguido históricamente entre penas alictivas y correccionales; y en atención a su rango interno puede hablarse de penas principales y accesorias.

Sin embargo, a partir de la aportación de Carrara, es tradicional clasificar las penas según sea el bien jurídico de que se prive su imposición: la pena capital supone la privación de la vida; las corporales, hoy desaparecidas, recaen sobre la integridad física del reo o le causan dolor; las privativas de libertad suponen un radical atentado a la libertad de locomoción; las restrictivas de libertad solamente coartan la libertad de residencia y movimientos sin anularla; las pecuniarias suponen una privación jurídica de carácter patrimonial y las infamantes recaen sobre el honor.⁴

El Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, en los artículos 41 y 42, clasifica las penas en principales y accesorias.

Penas principales

Entre las penas principales tenemos cuatro y que citaré a continuación:

a) Pena de muerte

Tiene carácter extraordinario en nuestro país y solo se aplica en determinados delitos como el asesinato, parricidio, violación calificada, plagio o secuestro, desaparición forzada, magnicidio y caso de muerte en los delitos de narcotráfico.

b) Pena de prisión

La pena de prisión se encuentra regulada en el Artículo 44 del Código Penal el cual establece: Artículo 44.- "La pena de prisión consiste en la privación de la libertad personal y deberá cumplirse en los centros penales destinados para el efecto. Su duración se extiende desde un mes hasta 50 años. A los condenados a prisión que observen buena conducta durante las tres cuartas partes de la condena se les pondrá en libertad en el entendido que si cometieren un nuevo delito durante el tiempo que estén gozando de dicho privilegio, deberán cumplir la pena y la que corresponda al nuevo delito cometido. La rebaja a que se refiere este Artículo no se aplicará cuando el reo observe mala conducta, cometiere nuevo delito o infringiere gravemente los reglamentos del centro penal en que se cumpla su condena."

c) Pena de multa

Encontramos regulada dicha frase en el Artículo 52 del Código Penal el cual reza: "Artículo 52.- La pena de multa consiste en el pago de una cantidad de dinero que el juez fijará, dentro de los límites legales."

d) Pena de arresto

El Artículo 45 del Código Penal establece: "Artículo 45.- (Pena de arresto). La pena de arresto consiste en la privación de libertad personal hasta por sesenta días. Se aplicará a los responsables de faltas y se ejecutará en lugares distintos a los destinados al cumplimiento de la pena de prisión.

Penas accesorias

Entre las penas accesorias tenemos las siguientes:

- a) Inhabilitación absoluta
- b) Inhabilitación especial
- c) El comiso
- d) Expulsión de extranjeros del territorio nacional
- e) Publicación de sentencia

Determinación de la pena

La sentencia ha de realizar una concreción referida a un hecho real, cuando es condenatoria la consecuencia jurídico-penal mas trascendente es la determinación de la pena. Cuando en el tipo se fundamenta la condena se prevé solamente una pena única e indivisible, pero en el Derecho Penal moderno es frecuente que la pena prevista sea divisible y no única, por ello el juez debe desplegar una técnica de determinación que, en ocasiones se deja a su libre arbitrio, pero que, entre otras, debe obedecer a criterios legales mas o menos estrictos.

Como ha expresado Antón
Oneca, la igualdad bien
entendida consiste en tratar
desigualmente los casos
desiguales.

"La teoría de la división de poderes y de la supremacía de ley condujo a la exigencia de completa sumisión del juez a la ley; ésta debía establecer taxativamente la pena a imponer en cada caso para evitar que los individuos pudieran sufrir una pena desigual basado en motivaciones políticas o personales del juzgador. Este pensamiento encontró fiel reflejo en el Código Penal Francés de 1791 que establecía una determinada cantidad de pena para cada infracción. Sin embargo, bien pronto se observó que las fórmulas abstractas y generalizadoras

de la ley no son capaces de abarcar las múltiples circunstancias que se dan en cada supuesto concreto; como ha expresado Antón Oneca, la igualdad bien entendida consiste en tratar desigualmente los casos desiguales. Por ello, se buscó un sistema intermedio equidistante del libro arbitrio judicial y del estricto legalismo. El Código Francés Napoleónico de 1810 corrigió la rigidez de 1791, estableciendo para cada delito una pena comprendida entre un máximo y un mínimo lo que permitía el arbitrio judicial dentro de un marco determinado. Criterio que fue adoptado por la inmensa mayoría de legisladores.”

Sistemas de determinación de la pena

En nuestro medio la determinación de la pena se clasifica de la siguiente manera: sistema de pena indeterminada, sistema de pena determinada y sistema de pena relativamente indeterminada.

a) Sistema de pena indeterminada

Este sistema consiste en que la pena prevista para el delito carece de límites máximos y mínimos o de límites máximos, haciéndose depender su duración de las necesidades e reforma del delincuente, fue apoyado por la escuela positiva; pero en la actualidad a perdido vigencia, pues se considera contrario al principio de legalidad.

b) Sistema de pena determinada

A través de este sistema se asigna la pena impuesta prevista para el delito mediante una pena fija.

c) Sistema de pena relativamente indeterminada

Este sistema de determinación de la pena, se caracteriza porque el legislador, previamente ha señalado un límite mínimo y máximo entre los cuales el juez tendrá que aplicar o individualizar la pena. De esa manera frena los posibles abusos por parte de los juzgadores, sin impedirles al mismo tiempo que ejerza una discrecionalidad limitada.

d) Determinación de la pena conforme nuestra legislación

En la legislación guatemalteca, los jueces al momento de dictar la sentencia se circunscriben a lo que establece el Artículo 65 del Código Penal, que prescribe: “El juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley, para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del

culpable, los antecedentes personales de éste y de la víctima, el móvil del delito, la extensión e intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurren en el hecho, apreciadas tanto por su número como por entidad o importancia. El juez o tribunal deberá consignar, expresamente, los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha considerado determinantes para regular la pena.”

En el mismo cuerpo legal anteriormente citado, en su Artículo 66 establece que: “Cuando la ley disponga que se aumente o disminuya una pena en una cuota o fracción determinada, se aumentará el máximo y el mínimo en la proporción correspondiente, o se disminuirá en su caso, quedando así fijada la nueva pena dentro de cuyos límites se graduará su aplicación conforme lo dispuesto en el Artículo 65 del Código Penal.”

Dentro de lo anterior se entiende, que en cuanto a la determinación de la pena en la legislación guatemalteca, se da lo que en doctrina se denomina como: pena relativamente indeterminada, con sus excepciones que más adelante detallaré, pues este sistema de penas, se caracteriza porque el legislador previamente ha señalado al juzgador un mínimo y máximo, entro los cuales tendrá que aplicar o individualizar la pena; de lo que se deriva que el juez al momento de determinar la pena, la fija dentro del máximo y mínimo de la pena establecida para cada delito, tomando en cuenta la peligrosidad del acusado, los antecedentes personales de éste y de la víctima, el móvil del delito, las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, como lo son las circunstancias atenuantes y agravantes; además la extensión e intensidad del daño causado; extremo que no se da en los delitos que contemplan una pena plenamente determinada.

Los juzgados de ejecución penal

“Los juzgados de ejecución de la pena son juzgados especiales que están a cargo de jueces que velarán por el control del cumplimiento de la pena de prisión y la resolución de las incidencias que se susciten durante su cumplimiento.”

Es necesario agregar a la anterior definición de los juzgados de ejecución no solo tienen la carga del control de la pena de prisión, deben además de ésta, controlar las medidas de seguridad, penas principales y accesorias y todos aquellos regímenes a los que los condenados quedan sujetos, incluso

los no condenados, siendo este caso la suspensión condicional de la persecución penal.

Asimismo es necesario hacer énfasis que en relación a la presente investigación la carga del Juzgado de Ejecución es velar por el cumplimiento de las condiciones que por imperativo legal conlleva la suspensión, así como que el beneficiario de la suspensión condicional de la pena no cometa nuevo delito, caso contrario se revocará dicho beneficio debiendo cumplir la pena suspendida.

En el año de 1992 el Congreso de la República de Guatemala promulgó el Código Procesal Penal, Decreto número 51-92 que además de implantar un juicio penal compatible con el estado de derecho democrático existente en nuestro país, creó varias instituciones como lo es el caso de los Jueces de Ejecución, regulado en el Artículo 51 “en el que se establece que dichos jueces tendrán a su cargo la ejecución de las penas y todo lo que a ellas se relacione...”. Por lo que la Corte Suprema de justicia creó el Acuerdo número 11-94, en el cual en el segundo considerando indica que se hace necesario un rediseño del Patronato de Cárceles y Liberados, puesto que las funciones que venían cumpliendo son tareas de los Jueces de Ejecución, estableciendo además en su Artículo primero transformar el Patronato de Cárceles y Liberados en el Juzgado Primero de Ejecución Penal. En la actualidad existen tres juzgados de ejecución penal en Guatemala.

Competencia

El Código Procesal Penal en su artículo 43 y 51 establecen la competencia de los Juzgados de Ejecución de la forma siguiente: “Competencia. Tienen competencia en materia penal: Los jueces de ejecución”; y Jueces de Ejecución. Los jueces de ejecución tendrán a su cargo la ejecución de las penas y todo lo que a ella se relacione, conforme lo establece este Código.

Naturaleza jurídica

En Guatemala la naturaleza jurídica del juez de ejecución de la pena es judicial, debido a que sus funciones son eminentemente judiciales, ya que será el encargado del mantenimiento de la legalidad en la ejecución de la pena y salvaguarda de los derechos de los condenados a pena de prisión frente a abusos de la administración.

Atribuciones

Entre las funciones de los juzgados de ejecución tenemos:

- Revisar el cómputo practicado en la sentencia como lo establece el artículo 494 del Código Procesal Penal, a efecto de determinar con exactitud la fecha en que cumplirán su condena los privados de libertad; cuando podrán solicitar su libertad anticipada por buena conducta de conformidad con el artículo 44 del Código Penal, y cuando podrán solicitar Libertad Condicional como lo establece el artículo 80 del mismo cuerpo legal.
- Notificar la resolución de cómputo al Ministerio Público, al condenado y a su defensor, quienes podrán observar el cómputo dentro del plazo de tres días.
- Reformar el cómputo, aún de oficio, cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias lo tornen necesario.
- Ordenar inmediatamente la detención del condenado si estuviere en libertad.
- Ordenar las copias indispensables para que se lleve a cabo las medidas para cumplir los efectos accesorios de la sentencia: comunicaciones, inscripciones, decomiso, destrucción y devolución de cosas y documentos.
- Resolver previa audiencia a los interesados los incidentes relativos a la ejecución, extinción de la pena, libertad anticipada y todos aquellos en los cuales, por su importancia, el juez lo estime necesario, serán resueltos en audiencia oral y pública citando a los testigos y peritos que deban informar durante el debate.
- Resolver sobre la libertad condicional y vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
- Controlar el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario.
- Promover la revisión de la sentencia ejecutoriada ante la Corte Suprema de Justicia cuando advierta que debe quedar sin efecto o ser modificada la pena impuesta o las condiciones de su cumplimiento por haber entrado en vigencia una ley más benigna.

- Estos juzgados deberán también llevar el control sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas, de modo que siempre se de el respeto a los derechos que nuestra ley le confiere al reo.
- Y el más importante en relación a la presente investigación; es velar por el cumplimiento de las condiciones que queda sujeto el condenado al otorgársele el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, las cuales al no ser cumplidas se revocará el beneficio citado; y si no diere motivo para su revocación se tendrá por extinguida

En relación a los juzgados de Paz

- Verificar el cumplimiento de la pena de arresto.
- Establecer que el lugar donde haya de cumplirse la pena de arresto esté en condiciones mínimas.
- Se hace efectivo el pago de la pena de arresto conmutándola, establecer la efectividad del pago.
- Llevar registro de las personas que han sido condenadas a faltas.
- Llevar el registro de las personas que han sido condenadas por delitos que puede el Juez de Paz conocer dentro de su competencia.
- Realizar las inscripciones o anotaciones respectivas, tanto para condenados a delitos y faltas.
- Proveer el control de las condiciones de abstención impuestas al haber otorgado el Juez de Paz un Criterio de Oportunidad.

Competencia de los jueces de paz

La competencia de los jueces de paz es de naturaleza mixta, es decir, que conocen dentro de su ámbito de competencia y jurisdicción de todos los ramos. Por ello, se establece que dentro de los antecedentes, los jueces de Paz han sido los primeros encargados de atender todos los asuntos que competen a la justicia y su administración, y los jueces de Primera Instancia, ya de manera más especializada como se ha pretendido más recientemente por parte de las autoridades de justicia.

El artículo 101 de la Ley del Organismo Judicial

establece: "Juzgados de Paz. Los juzgados menores se denominan juzgados de paz, a menos que por su especial naturaleza la Ley o la Corte Suprema de Justicia les dé distinta denominación. La Corte Suprema de Justicia establecerá los juzgados menores en el número y en los lugares que considere convenientes a la buena administración de la justicia."

En 1992 el Congreso de la
República de Guatemala
promulgó el Código
Procesal Penal, que creó
varias instituciones como lo
es el caso de los Jueces de
Ejecución.

Dentro de las facultades, tal como lo establece el artículo 104 de la Ley del Organismo Judicial: "Los jueces de paz ejercerán su jurisdicción dentro de los límites del territorio para el que hayan sido nombrados; su competencia por razón de la materia y de la cuantía serán fijadas por la Corte Suprema de Justicia; y sus atribuciones en el orden disciplinario son las mismas respecto a sus subalternos, que las otorgadas en el propio caso a los jueces de Primera Instancia".

Los jueces de paz, según el código procesal penal

En el artículo 43 se establece la competencia de los tribunales: "Tienen competencia en materia penal:

- 1) Los jueces de paz
- 2) los jueces de primera instancia
- 3) Los jueces unipersonales de sentencia
- 4) Los tribunales de sentencia
- 5) Los jueces de primera instancia por proceso de mayor riesgo
- 6) Tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo
- 7) Las salas de la corte de apelaciones
- 8) La Corte Suprema de Justicia; y
- 9) Los Jueces de Ejecución."

Aunado a lo anterior encontramos las funciones específicas de los jueces de Paz las cuales se encuentra reguladas en el Artículo 44 del Código Procesal Penal el cual establece: "Juez de Paz. Los jueces de paz tendrán las siguientes atribuciones:

- a) Juzgarán las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya pena principal sea de multa conforme el procedimiento específico del juicio por faltas que establece esta ley;
- b) Conocerán a prevención en los lugares donde no hubiere Juzgado de Primera Instancia, o bien se encontrare cerrado por cuestiones de horario o por alguna otra razón.
- c) Practicarán las diligencias urgentes y oirán a los detenidos dentro del plazo que manda la Constitución Política de la República.
- d) También podrán judicar, en los términos que lo define el artículo 308 de este Código, la investigación del Ministerio Público.
- e) Autorizarán la aplicación del criterio de oportunidad en los casos que establezca la ley;
- f) Practicarán las diligencias para las cuales fueren comisionados por los jueces de primera instancia, siempre que éstos no tuvieran sede en la misma circunscripción municipal.
- g) Realizar la conciliación en los casos previstos en este Código y resolver sobre las solicitudes de aprobación de los acuerdos alcanzados a través de la mediación."

La falta de competencia de los jueces de paz para ejecutar lo juzgado.

La ley del Organismo Judicial en su artículo 62 establece: "Competencia. Los tribunales sólo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se le hubiese asignado, lo cual no impide que en los asuntos que conozcan puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio."

De lo anterior es de fácil distinción, la confirmación de que el Juez de paz como un funcionario público puede realizar solo lo que dentro de sus parámetros debe de realizar, siendo estos los que la ley le lista. Es decir que éste o cualquier otro Juez solo podrán ejercer jurisdicción dentro de los límites establecidos en las leyes penales.

En base a lo anterior y a los artículos 7, 43, 44, 51 ya indicados dentro del presente trabajo, donde se establece la competencia de los Jueces de Paz Penal

y el Juez de Ejecución, en los cuales se determina que la ley no lo faculta para realizar la Fase o procedimiento de ejecución del Proceso Penal, siendo esta la última etapa de dicho proceso, el cual cuenta con un órgano específico y especializado para su conocimiento, es decir, la continuación y finalización del proceso penal, siendo dicho órgano el Juzgado de Ejecución Penal, el cual ya indicamos sus funciones.

La problemática deviene interesante, por la falta de obligación del cumplimiento de la pena impuesta en sentencia o de observación del cumplimiento de las abstenciones decretadas en los criterios de oportunidad otorgados por el Juez de Paz.

En primer lugar, describamos la necesidad del cumplimiento de la pena impuesta en sentencia por parte de un Juez de paz. El Juez de Ejecución que es el órgano especializado para la ejecución de lo juzgado por los tribunales, al cual la ley le da competencia especializada para ello, debe de exigir el cumplimiento de la pena, que en materia del Juez de Paz, consiste en la imposición de la Pena de Multa o la de Arresto, siendo esta última conmutable.

Dicha necesidad deriva del hacer cumplir la sanción impuesta a quien ha sido hallado responsable de un leve ilícito de la ley penal en este caso una falta, ya que el cumplimiento de dicha sanción es la que da certeza a la funcionabilidad de la pena, siendo esta sancionadora o preventiva. Sancionadora para la persona que cometió el ilícito penal reciba el reproche social de su culpabilidad debiendo cumplir con el arresto o el pago de la multa impuesta; y en el segundo caso que los demás individuos de la

La Ley del Organismo Judicial determina que un juez sólo podrá ejercer jurisdicción dentro de los límites establecidos en las leyes penales.

sociedad, observen y se limiten a realizar un ilícito penal porque, estos serán sancionados como el que ya fue condenado.

Dentro de este aspecto es lamentable señalar que en algunos casos el Juez de Paz únicamente condena

e impone la pena que el estime, y no observa el cumplimiento de la pena, lo cual causa un desgaste innecesario al Organismo Judicial, toda vez que se lleva a cabo todo un proceso para la verificación o no de la culpabilidad de una persona que ha sido señalada de haber cometido un ilícito; y al final no se le aplique la sanción adecuada.

De los antes descrito no existe una estadística de cuantas sentencias dictadas por los Jueces de Paz se encuentran sin ser ejecutadas, pero a manera de ilustración y para la verificación de que sí existe dicha problema, consigno como ejemplo el proceso identificado con el número 1967-2004 del Juzgado Primero de Paz del Ramo Penal de Turno (el cual en la actualidad ya no se encuentra en funciones) dicho proceso llegó a conocimiento del Juez de Paz Penal de Faltas de Turno, y en el mismo se estableció que desde el día cinco de enero del año dos mil cinco se dictó sentencia contra el señor Henry Leonel Escobar Sinay en la cual se le condeno por el delito de RESPONSABILIDAD DE CONDUCTORES, imponiéndole la multa de CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES, convertibles a razón de un día por cada cincuenta quetzales dejados de pagar, es decir el condenado debía haber permanecido en prisión por el incumplimiento del pago de la multa, nueve días. Pero es el caso que el cumplimiento de la pena se dio hasta el día cinco de febrero del año dos mil ocho, es decir tres años después de haber sido condenado.

El cumplimiento de lo impuesto en sentencia es importante, ya que el delincuente, establece que si el comete un ilícito penal, el Estado en base a su *Ius Puniendi*, hace un reproche social y le castiga. Pero si el Estado, (Juez) no cumple con lo ordenado en sentencia, la política criminal que este ejerce, no se cumple ya que el delincuente observa que su costo de oportunidad es mínimo, ya que delinquirió y no recibió su castigo. Entonces los ejes en que se fundamenta la política criminal no se cumplen y el delincuente puede incluso a subir de nivel en relación a los ilícitos penales que él comete.

En segundo lugar, el relación a la aplicación de un criterio de oportunidad por parte de un Juez de Paz, al ser este otorgado la ley obliga a que le sea impuesto al beneficiado de esa medidas de desjudicialización, una serie de abstenciones que deben de ser vigiladas, para condicionar la conducta del sindicado, y si este no se aparta de dicha abstenciones, el órgano jurisdiccional, tendrá por extinguida la responsabilidad Penal.

Es preciso aclarar que a mi criterio quien debe de vigilar las abstenciones o condiciones impuestas en la medida de desjudicialización del Criterio de Oportunidad es el Juez de Ejecución; ya que la ley adjetiva penal establece en su artículo 288 "Instrucciones al juez de ejecución. El juez de primera instancia solicitará al de Ejecución que provea el control sobre la observancia de las imposiciones e instrucciones y que le comunique cualquier incumplimiento, según la reglamentación que dicte la Corte Suprema de Justicia. En caso de incumplimiento de las imposiciones o instrucciones, el Juez de primera instancia dará audiencia al Ministerio Público y al imputado, y resolverá, por auto fundado acerca de la reanudación de la persecución penal. La decisión podrá ser precedida de una investigación sumaria y es irrecurrible." Teniendo claro que quien vigila el cumplimiento o incumplimiento de las abstenciones impuestas dentro del criterio de oportunidad, que hace el Juez de Paz con los criterios por el otorgados.

La determinación de la pena por parte del Juez de paz

La determinación por parte del Juez de Paz dentro del ámbito de su competencia, es muy difícil ya que este carece de información suficiente para determinar la pena que debe imponer. La determinación de la pena en muchas ocasiones se deriva del juzgamiento de otras causas penales. Recordando que la determinación de la pena dentro de nuestro ámbito, como en las primera páginas de este capitulo se explicó, es relativamente indeterminada, ya que el Juez de Paz debe ubicarse en las reglas que determina el artículo 65 del Código Penal, queriendo hacer mayor énfasis en la reincidencia y habitualidad. Que en faltas penales también operan estas agravantes, lo cual se desprende del artículo 480 del Código Penal, el cual establece: Que en materia de faltas son aplicables las disposiciones contenidas en el Libro Primero de este Código, en lo que fuere conducente, con las siguientes modificaciones: 1°...2°...3°...4°. La reincidencia en faltas no se apreciará después de transcurrido un año de la fecha de la sentencia anterior... Es decir que el Juez de Paz al observar la existencia de estas agravantes y en base a las reglas de determinación de la pena debe de sancionar más severamente a quien comete un ilícito penal.

Lo que deseo señalar en este apartado es que al ser un individuo condenado por una falta debe de existir un registro para establecer cuantas veces a este cometido la misma u otra falta para así dar

cumplimiento a lo que con mucho sentido establece las agravantes, ya que si una persona delinque una y otra vez debe de ser observado y tratado de manera especial por parte del Estado, cumpliendo con su parte de política criminal el Juez de Paz, ya que este al establecer la comisión de varias faltas debe de graduar hacia mas días de arresto o una mayor multa la pena que impondrá a quien se halle en esa situación.

Pero también se debe de regular la obligación de que se registren las faltas cometidas por los individuos sujetos a proceso penal, ya que sin el mismo no puede el Juez de Paz tener la certeza jurídica de quien esta infringiendo de manera consecutiva la ley penal. Y así dar certeza al castigo que se deba imponer al cometer un leve ilícito a la ley penal.

Muy relacionado al registro de faltas que propongo su creación, existe otro problema de la misma naturaleza y el cual es derivado de la ejecución de la pena y también incumplido por los Jueces de Paz, y el cual consiste que dentro de los delitos que son sancionados con pena de multa y pueden ser sometidos a conocimiento del Juez de paz por el Proceso Especifico del Juicio de Faltas, el Juez en este caso sí tiene la obligación de remitir la Forma Uno a la Unidad de Antecedentes Penales del Organismo Judicial para que se anote el delito por el cual esta siendo una persona sancionada. Y así nuevamente se tenga certeza jurídica del castigo al cual está siendo sometida una persona que transgrede la ley, ya que al incumplirse esta obligación, no se puede observar la reincidencia y la habitualidad para la imposición de una sanción adecuada al infractor.

Lo anterior se determinó por la gran cantidad de casos que llegan a conocimiento de los Juzgado de Paz Penal del ilícito penal de Responsabilidad de Conductores, siendo el bien jurídico tutelado en este tipo penal es la seguridad del tránsito, y el mismo tipo penal establece en su artículo 157 "En caso de reincidencia, las sanciones de este artículo se duplicarán". Pero como se aplicará esta obligación si el Juez de Paz no envía el control respetivo para que si un individuo es juzgado nuevamente por una causa similar sea sancionado por otro juez como corresponda.

La falta de certeza jurídica de la pena por parte del Juez de Paz.

Al desconocer el Juez de Paz las obligaciones que competen a la ejecución de la pena, y esto debido a que, este no tiene competencia para ejecutar la pena

impuesta, lo que se esta realizando es una serie de procesos que no se le provee de certeza jurídica, entendida esta como el estricto cumplimiento del debido proceso y en consecuencia la realización de todas la obligaciones del procedimiento; en especifico las obligaciones de la fase de ejecución y las directrices que realiza la agravación de la pena como lo es la reincidencia y la habitualidad, en el sentido que al no cumplir con la graduación o moderación de la imposición de la pena tal y como lo ordena el artículo 65 observando las reglas y las agravantes ya indicadas; y aún mas grave cuando la norma ordena que al hallarse una persona por segunda vez responsable por algún delito se le debe de sancionar con el doble de la pena determinada en el código penal; tal y como es el ejemplo del delito de Responsabilidad de Conductores y el de Potación de Arma en Estado de Embriaguez, Uso de Estupefacientes y/o Barbitúricos.

La falta de certeza del castigo que genera este descontrol por parte de los juzgados de Paz se ve reflejado tanto en faltas ya que la reincidencia y la habitualidad operan en las mismas, así como el los delitos que se tramitan el procedimiento especifico de faltas que son sancionados con pena de multa y que son los que contienen el aumento al doble de imposición de sanción, y aún mas grave que si esta certeza jurídica del castigo no se corrige el costo de oportunidad del delincuente se vera disminuido por la situación que a partir del uno de julio del presente año el Juez de Paz que designe la Corte Suprema de Justicia, conocerá delitos que son sancionados con pena de prisión que no sea superior a los cinco años; y en consecuencia tanto con las faltas, delitos sancionados con multa y los delitos menos graves

Si el juez no cumple con lo ordenado en sentencia, esto puede llevar al delincuente a considerar que el costo de delinquir es mínimo.

al no sancionar como corresponde, el mensaje a la criminalidad es que su costo de oportunidad es poco o nulo y en consecuencia la delincuencia aumentará; ya que como es sabido por los jueces, el delincuente inicia su actividad ilícita con hechos leves como hurtar o robar objetos de poco valor (falta contra la Propiedad), si es capturado ingresa al sistema

de justicia conoce el sistema, y observa que lo que se realiza no le perjudica, o su costo es mínimo, entonces posteriormente lo replica una y otra vez y poco a poco va aumentando la "gravedad" de los hechos ilícitos hasta organizarse y realizar una delincuencia en pandilla, es decir que los hechos o ilícitos menos graves son como un resfriado el cual, si no se cuida, (sanción en el juzgado de paz) evoluciona y se convierte en neumonía, así opera el delincuente.

Conclusiones

1. El Juez de Paz Penal carece de competencia para la ejecución de lo juzgado por él.
2. El Juez de Paz Penal debe de cumplir con la fase de Ejecución Penal.
3. Al otorgar la medida desjudicializadora de criterio de oportunidad el Juez de Paz debe de cumplir con la vigilancia de las abstenciones impuestos o bien remitirlo al Juez de Ejecución para su vigilancia.
4. No existe un registro de faltas y delitos conocidos en el procedimiento específico de faltas; y en el procedimiento de delitos menos graves, por parte del Juez de Paz para la aplicación correcta de las agravantes de Reincidencia y Habitualidad.
5. El Juez de Paz no cumple con la obligación de remitir a la Unidad de Antecedentes Penales la inscripción de los delitos sancionados con pena de multa y delitos no mayores a cinco años su pena.
6. El Juez de Paz carece de herramientas de información que le permitan una adecuada política criminal en virtud que no tiene acceso a los datos de la Unidad de Antecedentes Penales.
7. En los procesos sometidos al amparo de los jueces de Paz no se cumplen con las obligaciones que se derivan de la Fase de Ejecución de la Pena.
8. No existe certeza jurídica sobre la aplicación de las condenas impuestas por parte de los Jueces de Paz.

Recomendaciones

1. Que se otorgue competencia a los Jueces de Paz, para la ejecución de lo juzgado, o sean remitidas las sentencias al Juzgado de Ejecución Penal para su procedimiento o se creen Juzgado de Paz de Ejecución.
2. Que se cree un registro de faltas, el cual debe de ser llevado por la Unidad de Antecedentes Penales en forma separada a los delitos, para la aplicación de las agravantes de reincidencia y habitualidad.
3. Que la Corte Suprema de Justicia gire circular interna ordenando a los Jueces de Paz la remisión de la Forma uno a la Unidad de Antecedentes Penales en los delitos que son sancionados con pena de multa y que son conocidos por ellos, así como los delitos no mayores a cinco años; para así aplicar las agravantes de reincidencia y habitualidad.
4. Que la Corte Suprema de Justicia gire circular interna ordenando a los Jueces de Paz la remisión de los procesos en los cuales se ha otorgado Criterio de Oportunidad al Juzgado de Ejecución para la vigilancia de las medidas de abstención impuestas.

Notas

¹LANDROVE DIAZ. Gerardo. Las consecuencias jurídicas del delito. Pág. 17.

²MUÑOZ CONDE. Francisco. Introducción al Derecho Penal. Pág. 33.

³MEZGER EDMUD. La individualización de la pena. Pág. 37.

⁴LANDROVE DIAZ. Gerardo. Ob. Cit. Pág. 24.

Bibliografía

ALONSO DE ESCAMILLA, Avelina. El juez de vigilancia penitenciaria. 1ª. ed.; Madrid, España: Ed. Civitas, S.A., 1985.

BARRIENTOS PELLECCER, Cesar Ricardo. Curso básico sobre derecho procesal penal en Guatemala. Guatemala: Ed. Llerena, S.A., 1993.

BARRIENTOS PELLECCER, Cesar Ricardo. Derecho procesal penal guatemalteco. 2ª. ed.; Guatemala: Ed. Magna Terra Editores S.A., 1995.

BINDER, Alberto. Introducción al derecho procesal penal. Argentina: Ed. Alfa Beta. S. A., 1993.

CHICHIZOLA, Mario. La individualización de la pena. Buenos Aires, Argentina: Ed. Abeledo Perrot S.A., 1967.

DE LEON VELASCO, Héctor Anibal y José Francisco de Mata Vela. Derecho penal guatemalteco, parte general y parte especial. 11º. Ed. corregida y actualizada; Ed. Lerena.

DIAZ SANTOS, Rosario Diego y Eduardo Caparrós Fabián. Reflexiones sobre las consecuencias jurídicas del delito. Buenos Aires, Argentina: Ed. Depalma, S. A., 1983.

GARCIA VALDÉZ, Carlos. Teoría de la pena. Madrid, España: Ed. Tecnos, 1985.

LANDROVE DIAZ, Gerardo. Las consecuencias jurídicas del delito. Barcelona, España: Ed. Bosch, 1984.

MADRAZZO, Carlos. Educación, derecho y readaptación social. Editado en Instituto Nacional de Ciencias Penales, México 1979.

MEZGER, Edmud. La individualización de la pena. Buenos Aires, Argentina: Ed. Ebeledo Perrot, 1967.

MIR PUIG, Santiago. Derecho penal parte general. Barcelona, España: Ed. PPU, 1984.

MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho Penal. Barcelona, España: Ed. Tecnos, S.A.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de derecho penal parte general, 3ª. Y 6ª. ed.; Buenos Aires, Argentina: Ed. Ediar, S.A., 1982 y 1990.

Diccionarios

CABANELLAS, GUILLERMO. Diccionario enciclopédico de derecho usual, 14ª ed.; revisada actualizada y ampliada por Luis Alcalá Zamora y Castillo. Buenos Aires, Argentina: Ed. Eliasta, S.R.L., 1979.

Diccionario de la lengua española, Real Academia Española 19ª ed. Madrid, España, Ed. Espasa Calpe S.A, 1995.

Leyes

Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Nacional Constituyente, 1986.

Código Penal. Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 17 73, 1973.

Código Procesal Penal. Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 51- 92, 1992.

Ley del Organismo Judicial. Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 289, 1989.

Sobre el autor

LIC. WALDO JOSUÉ ALVIZUREZ RUANO
Juez de Paz del Municipio de Villa Canales,
del Departamento de Guatemala.